



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veinte de septiembre de dos mil veintiuno

Tipo de pretensión:	Responsabilidad civil por accidente de tránsito
Procedencia:	Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín
Demandantes:	Emérito Córdoba Buenaños y otro.
Demandados:	Axal Colpatria Seguros y otros
Radicado:	05001 31 03 008 2017 00744 01
Asunto:	Sentencia de segunda instancia

ASUNTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, se decide por escrito el recurso de apelación formulado por el apoderado de Hernando Antonio Múnera Madrid y Flota Nueva Villa S.A.S., frente a la sentencia del 24 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

La demanda (fls. 2 a 11 del cuaderno principal).

Emérito Córdoba Buenaños, en nombre propio y en calidad de apoderado judicial de Juan Pablo Córdoba Echavarría, demandó a la Empresa de Transporte Flota NuevaVilla S.A.S., Hernando Antonio Múnera Madrid, Jhon Jairo Arteaga Álvarez y Axa Colpatria Seguros S.A.

El demandante afirma lo siguiente en el fundamento de sus pretensiones:

- El 27 de enero de 2013, Juan Pablo Córdoba Echavarría, de 16 años de edad, se transportaba en un vehículo de servicio público, clase bus, de placa TSK 214, en el barrio Manrique, del municipio de Medellín. El bus, de propiedad de Hernando Antonio Múnera Madrid, lo conducía Jhon Jairo Arteaga Álvarez. Estaba afiliado a la empresa de transporte Flota Nueva Villa S.A.S. y su actividad se encontraba amparada por una póliza de seguro expedida por Axa Colpatria Seguros S.A.
- Se afirma que a las 19.50 horas aproximadamente, en la calle 72 con carrera 32, el conductor del bus mientras transitaba entre carriles, a alta velocidad, y hablaba por su teléfono celular, habría provocado una situación de peligro de colisión con un taxi que transitaba por un sentido contrario al suyo, mientras invadía parcialmente su carril. En reacción al riesgo de la colisión, el conductor realizó una maniobra brusca de giro para esquivar el taxi, perdiendo el control del vehículo, que terminaría colisionando contra una reja de una casa de la zona.
- Antes de la colisión, el conductor estaba transitando con la puerta trasera del bus abierta. Entre la maniobra de giro y la colisión, varios pasajeros fueron expulsados del vehículo a través de la puerta, incluido el joven Juan Pablo Córdoba Echavarría.
- En el accidente el demandante habría sufrido lesiones en su brazo derecho, que generaron deformidad y perturbación funcional de carácter permanente. Como consecuencia de la lesión sufrida estuvo incapacitado por un periodo de 75 días. Fue necesaria atención médica, incurriendo en gastos, y perdiendo oportunidades laborales y sufrido daños inmateriales, psicológicos y en sus relaciones con otros.

- Las consecuencias de las lesiones derivadas del accidente también habrían ocasionado perjuicios morales al demandante Emérito Córdoba, padre de Juan Pablo Córdoba.
- El conductor se habría allanado a las imputaciones de la Fiscalía por lesiones personales culposas que habrían sufrido varios pasajeros en el accidente. En consecuencia, el Juzgado 34 Penal con Funciones de Conocimiento de Medellín le habría impuesto una condena de 11 meses y 21 días de prisión. La autoridad de tránsito, por su parte, lo habría declarado contravencionalmente responsable por los hechos, como infractor de normas de tránsito.

Con base en lo anterior, se solicita que se condene a los demandados a pagar los siguientes conceptos:

- Por concepto de daño emergente, \$8.000.000.
- Por concepto de daños morales a favor de Juan Pablo Córdoba, 100 SMLMV.
- Por concepto de daños morales para Emérito Córdoba, 50 SMLMV.
- Por concepto de perjuicios psicológicos, a favor de Juan Pablo Córdoba, 100 SMLMV
- Por concepto de perjuicios en la vida de relación a favor Juan Pablo Córdoba, 100 SMLMV.

La contestación de Axa Colpatria Seguros S.A. (cfr. fls. 146- 207).

La aseguradora se opuso a las pretensiones de la demanda. Por un lado, señala que la maniobra que dio lugar al accidente en el que habría resultado lesionado Juan Pablo Córdoba, la realizó el conductor del bus en un estado de necesidad o urgencia, para evitar la colisión con un taxi. A juicio del apoderado de la aseguradora, lo anterior rompería el nexo causal y entre el daño cuya reparación se pretende y un hecho imputable a los demandados.

Asimismo, se alegó la excepción de prescripción, señalando que habrían transcurrido más de dos años entre el accidente y la reclamación judicial, habiéndose extinguido con ello tanto la denominada “acción contractual” del pasajero frente al transportador, como la posibilidad de realizar reclamaciones directas frente a la aseguradora por la ocurrencia del siniestro.

También se propusieron “excepciones” relativas al contrato de seguro. Se afirma que una eventual condena debería ceñirse a los conceptos y límites de la póliza y sus condiciones generales, se insiste en que ésta no cubre lucro cesante y contiene otras exclusiones expresas. Se insiste en los sublímites de cobertura de la póliza por perjuicios morales.

Se alega que los perjuicios que se reclaman en la demanda deben probarse.

La contestación de Hernando Antonio Múnera Madrid y Flota Nueva Villa S.A.S. (cfr. fls. 268-280).

El apoderado de los demandados se opuso a las pretensiones alegando “culpa exclusiva de la víctima”. Se alega que Juan Pablo Córdoba habría resultado lesionado en el accidente por causas que sólo a él le son imputables, pues se transportaba al lado de la puerta trasera del bus, con sus extremidades afuera del automotor, bajando y subiendo del vehículo cada vez que éste se detenía. Se reconoce como cierto que el bus transitaba con la puerta abierta, pero se alega que esto obedecía a exigencias de los grupos delincuenciales de la zona, según reportes de la Policía. Por tanto, la única imprudencia o culpa generadora del accidente, sería la conducta de la propia víctima.

En subsidio, se solicita que se valore la conducta de Juan Pablo Córdoba como causa concurrente del daño, para efectos de reducción de la indemnización. Se opone a la codena en perjuicios.

El llamamiento en garantía (cfr. fls. 1-3, Cuaderno 2).

Hernando Antonio Múnera Madrid llamó en garantía a Axa Colpatria Seguros S.A. El llamante afirmó que, ante una eventual condena en razón de la demanda principal, la llamada estaría obligada a responder a nombre suyo. Lo anterior, en razón del contrato de seguro con póliza Núm. RCE 6158005376, que amparaba la actividad del vehículo involucrado en el siniestro al momento del accidente. El patrimonio asegurado sería el del llamante en garantía. La póliza contiene una cobertura de 60 SMLMV. El llamante solicitó que, en caso de expedirse una condena en su contra en el proceso principal, se impusiera a la aseguradora el pago de los perjuicios bajo la cobertura de la póliza.

La oposición al llamamiento en garantía (cfr. fls. 19 y ss. C. 2).

Aunque la aseguradora reconoció la existencia del contrato de seguro y no se opuso a su afectación en los términos de la póliza, señaló que el tomador y asegurado habría sido Flota Nueva Villa S.A.S. Se niega que Hernando Antonio Múnera Madrid sea parte del contrato de seguro. En consecuencia, se alega que carece de legitimación en la causa para realizar el llamamiento. Se propone la excepción de prescripción de la “acción directa” del contrato de seguro, por haber pasado más de dos años entre la ocurrencia del siniestro y la reclamación. Se alega que se configura una exclusión del deber de indemnizar de la aseguradora, por haber ocurrido el accidente bajo la culpa grave del conductor.

En subsidio de lo anterior, se mencionan los conceptos y los límites de la póliza como marco de una eventual responsabilidad de la aseguradora.

La sentencia de primera instancia (cfr. fls. 311-318).

El juez concluyó que los demandados estaban llamados a responder por el

daño que sufrió Juan Pablo Córdoba Echabarría en el accidente de tránsito. Se encontró acreditado que la empresa Flota Nueva Villa S.A.S. incumplió la obligación de transportar sano y salvo al pasajero demandante, a causa de un accidente de tránsito provocado por el conductor del bus.

Sobre la defensa consistente en alegar el hecho de la víctima como causa exclusiva o concurrente del daño, se concluyó que no se aportó ningún medio probatorio que acreditara los hechos que se alegaron en ese sentido; a saber, que el pasajero se transportaba imprudentemente en el borde de la puerta.

Sobre la prescripción, con apoyo en precedentes se ofrece una interpretación restrictiva de los artículos 993 y 1081 del Código de Comercio, para señalar que el término corto de dos años que esas normas establecen no son aplicables a este caso. El término del artículo 993 regiría sólo para las obligaciones típicas del contrato de transporte, en todo caso distintas a las reclamaciones ordinarias de indemnización por incumplimiento. El término prescriptivo del artículo 1081 aplicaría sólo para quienes son parte en el contrato de seguro.

Se encontraron probados los perjuicios morales para ambos demandantes. Se cuantificaron en 15 SMLMV para Juan Pablo Córdoba Echavarría y en 10 SMLMV para Emérito Córdoba Buenaños. También se reconocieron perjuicios por daño a la vida de relación a favor del primero, por 20 SMLMV. No se encontraron probados los perjuicios materiales referentes al daño emergente.

La apelación de Hernando Antonio Múnera Madrid y Transporte Nueva Villa S.A. (cfr. fls. 324-325).

En el escrito de apelación, el apoderado de ambas partes presenta dos reparos frente a la sentencia de primera instancia:

- El primero consiste en cuestionar el fundamento de derecho de la condena, pues se habría aplicado un régimen de responsabilidad civil extracontractual, a pesar de que se probó que el accidente ocurrió en ejecución de un contrato de transporte.
- Esto afectaría los términos de prescripción, pues a juicio del apelante debe aplicarse el término corto de dos años del artículo 993 del Código de Comercio, por tratarse de acciones derivadas de un contrato de transporte. Así, la “acción” estaría prescrita, pues el accidente ocurrió en el 2013 y la demanda sólo se habría presentado hasta el 2017.

La actuación en segunda instancia.

Ante el traslado dispuesto por el Tribunal para las alegaciones previstas en la ley para esta instancia, se recibieron los siguientes pronunciamientos:

- El 8 de junio de 2020, el apoderado de AXA COLPATRIA SEGUROS insistió en los reparos presentados ante el juez de primera instancia.
 - Señala que se erró al momento de definir el marco jurídico para el caso, pues en la demanda se afirmó que el régimen aplicable es el régimen contractual y el juez habría aplicado un régimen extracontractual para condenar, afectando la congruencia y el derecho de contradicción de los demandados.
 - Se cuestiona que se haya inaplicado la norma especial sobre los términos de prescripción derivados del contrato de transporte, contenida en el artículo 993 del Código de Comercio, para aplicar términos civiles de prescripción.

- Se cuestiona que se haya inaplicado la norma especial sobre los términos de prescripción de las “acciones” derivadas del contrato de seguro, previstas en el artículo 1081 del Código de Comercio, para aplicar términos civiles de prescripción.
 - Se señala que como la condena se realizó con base en un marco de responsabilidad civil extracontractual, no existe prueba de un contrato de seguro que obligue a la aseguradora a asumir la condena, pues la póliza aportada ampara sólo la responsabilidad contractual.
 - Se opone al llamamiento en garantía que realizó Hernando Múnera Madrid, bajo la consideración de que el conductor del bus carece de legitimación en la causa para las peticiones de garantía, en la medida que no es ni parte del contrato de seguro ni damnificado con legitimación extraordinaria.
 - Se señala que el juez impuso condenas a la aseguradora por conceptos no incluidos en el contrato de seguro, como los perjuicios morales y el daño a la vida de relación.
 - También se argumenta que como el accidente ocurrió por dolo o culpa grave del conductor del bus, se configuró una causal de exclusión de la responsabilidad de la aseguradora, según el contrato de seguro.
- El apoderado de Flota Nueva Villa S.A.S. y Hernando Múnera Madrid presentó los siguientes argumentos con el fin de que se revoque la decisión de primera instancia:
- Por un lado, señaló que la sentencia es incongruente porque impuso una condena con base en un régimen de responsabilidad civil contractual y extracontractual, a pesar de que en la

demanda el fundamento jurídico de las pretensiones se circunscribió al régimen de responsabilidad contractual. Lo anterior, habría comprometido el derecho de contradicción y defensa del demandado.

- Se afirma que de haberse aplicado el régimen jurídico adecuado -responsabilidad en el marco del contrato de transporte-, se habría concluido que las prestaciones que reclama la parte demandante se encuentran prescritas, acorde con lo dispuesto en el artículo 993 del Código de Comercio.

CONSIDERACIONES

Presupuestos procesales:

La Sala no encuentra impedimentos para dictar sentencia de segunda instancia.

Problemas jurídicos:

Atendiendo los reparos de las partes apelantes y su sustentación en segunda instancia, la Sala debe resolver los siguientes problemas:

- ¿Se faltó al deber de congruencia en la sentencia de primera instancia, al momento de definir el marco jurídico aplicable al litigio? ¿Está el juez atado a las formulaciones que realicen las partes sobre particular?
- ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable cuando en la pretensión se reclaman perjuicios frente a la empresa transportadora por daños causados en un accidente de tránsito durante la ejecución de un contrato de transporte?

- ¿Cuál es el ámbito de aplicación del término corto de prescripción del artículo 993 del Código de Comercio, en relación con el contrato de transporte?
- ¿Cuál es el ámbito de aplicación del término de prescripción del artículo 1081 del Código de Comercio, en relación con el contrato de seguro?
- ¿Están dados los supuestos legales y contractuales de legitimidad, cobertura y ausencia de exclusiones para imputar responsabilidad a la aseguradora?

La causa jurídica y la congruencia en los procesos de responsabilidad civil:

Las consideraciones jurídicas alrededor de un litigio los escenarios procesales donde se discuten cuestiones civiles suelen tener por los menos tres puntos de vista, no siempre coincidentes: el del demandante, el del demandado y el del juez. El demandante debe expresar las razones jurídicas que justifican su reclamación desde la demanda -art. 82.8 del CGP-. Por su parte, en la contestación, el demandado debe expresar las razones jurídicas de su defensa -art. 96 ibídem-. Por último, el artículo 280 del CGP exige que el juez exprese los fundamentos jurídicos de sus conclusiones, al momento de resolver el litigio en la sentencia.

Para este caso es pertinente preguntarse: ¿Debe existir una relación de congruencia entre las alegaciones jurídicas de las partes y entre éstas y los fundamentos jurídicos de la decisión del juez en los procesos con pretensiones de responsabilidad civil por accidente de tránsito, en razón de los daños que sufre el pasajero en ejecución de un contrato de transporte?

La norma que regula la congruencia en el proceso civil es el artículo 281 del CGP: esa disposición impone al juez la obligación de decidir exclusivamente sobre los hechos (causa fáctica de la pretensión) y las peticiones (objeto de la pretensión) que se formularon oportunamente por el actor. La literalidad de la disposición nada dice sobre la identidad de fundamentos jurídicos de la demanda (causa jurídica), con los fundamentos jurídicos de la sentencia.

Por tanto, si nos atenemos a esa regla, siempre que se decida sobre los hechos y las peticiones expresamente afirmadas en la demanda o en otra oportunidad legal, el juez no tiene ninguna restricción para resolver la pretensión del actor con una regla jurídica o una interpretación normativa distinta a la regla que se formuló en la demanda o en la contestación. La regulación del artículo 281 parece seguir la tradición del “*Da mihi factum, dabo tibi ius*” - “dame los hechos, yo te daré el derecho”-.

Los valores cuya finalidad persigue el deber de congruencia es preservar en la mayor medida posible el derecho de contradicción del demandado y limitar la potestad judicial para tomar decisiones que afecten a las partes. El demandado ejerce su oposición frente a los hechos y a las reclamaciones efectivamente formulados en la demanda: negándoles, exencionándoles y adelantando actividad probatoria para controvertirlos. Si el juez decidiera por fuera de ese marco fáctico y objetivo, adoptaría decisiones por fuera de su potestad legítima.

Este no es el caso cuando se analiza un eventual deber de congruencia en relación con la causa jurídica en la pretensión civil de responsabilidad. A diferencia de lo que ocurre con los hechos y las peticiones de la demanda, las alegaciones jurídicas del demandante no imponen al demandado un límite a las alegaciones jurídicas de su defensa. Éste debe ejercer su oposición en el plano de los hechos y de las peticiones consecuentes que según el demandante lo obligan a responder. Frente a ellos, su negación o su excepción, el

demandado es libre de formular las alegaciones jurídicas que considere pertinentes en su defensa, sin que lo aten las interpretaciones jurídicas de la demanda.

Por otro lado, el juez no desborda su competencia si decide por fuera de las interpretaciones jurídicas de las partes. La relación jurídica que supone el proceso implica la autoridad de la *jurisdicción* para *decir el derecho* desde una posición supraordenada. Las partes llevan hechos y peticiones que conforman un litigio y delimitan la competencia del juez; éste debe resolverlas de buena fe conforme al derecho que considera justificadamente aplicable al caso, acorde con su leal saber y entender. El juez no está ahí para aceptar o rechazar las formulaciones jurídicas que le llevan las partes. Está para decidir sobre los hechos y las peticiones del litigio, con base en su propia interpretación del ordenamiento jurídico: sometido sólo a la Constitución y la ley, a su prudente juicio al interpretarlas.

Por tanto, mientras el juez se esté a los hechos y a las reclamaciones de las partes, no sólo está dentro de los marcos legales de la congruencia en materia civil cuando decide conforme a sus comprensiones jurídicas debidamente justificadas -aunque estas sean distintas a las alegadas por las partes-, sino que hacerlo de otro modo comprometería su deber en el ejercicio de la función jurisdiccional, tanto como los fines públicos hacia los que se orienta esa función.

Ahora bien, cuando un pasajero resulta lesionado en un accidente de tránsito en ejecución de un contrato de transporte, suelen acumularse pretensiones diferentes, que tienen fundamento en unos mismos hechos, para distintas reclamaciones, a favor de distintos sujetos. Lo que esas pretensiones tienen en común es que se reclama una indemnización propia frente al transportador, en relación con el daño que sufrió el pasajero en el accidente. Cuando el demandante es directamente el pasajero, se comprende que el régimen jurídico aplicable es el de la responsabilidad contractual, porque el

accidente ocurrió en ejecución de un contrato, entre el pasajero demandante y el transportador demandado -art. 1616 del Código Civil, en concordancia con las normas especiales del código de comercio para el contrato de transporte-. Pero si quienes reclaman perjuicios propios son víctimas indirectas, como los familiares del pasajero, se entiende que el régimen aplicable es de naturaleza extracontractual, porque entre éstos y la empresa demandada no media ningún contrato -art. 2341 ibídem-.

En este punto interesa considerar lo siguiente: si en una misma demanda de responsabilidad civil se acumulan pretensiones de la víctima directa y la víctima indirecta frente a la empresa transportadora, pero no se formulan diferenciaciones sobre el régimen aplicable a cada tipo de víctima al momento de formular la causa jurídica, señalándose genéricamente en la demanda el “régimen contractual”: ¿debe el juez negarse a aplicar el régimen jurídico que corresponda a cada pretensión y ceñirse estrictamente a los formulaciones jurídicas de la parte? En consecuencia, ¿debe el juez desestimar las pretensiones de la víctima indirecta, por no haberse formulado adecuadamente el régimen aplicable para ésta?

La respuesta es negativa. Es el juez quien define cuál es el régimen aplicable a cada litigio al momento de dictar sentencia. Las formulaciones de las partes no atan esa decisión, a diferencia de lo que ocurre con los hechos y las peticiones del litigio (pretensión procesal), frente a las cuales sí está sometido a la congruencia. El juez tiene el deber de justificar el marco jurídico desde el cual resuelve el caso. Si este es diferente del que alegan las partes, debe justificar suficientemente su propia interpretación, señalando expresamente por qué considera inadecuados los planteamientos jurídicos de los litigantes. Mas no está atado a ellos.

Sobre este punto, ha señalado la Corte -SC5193-2020- en casos similares:

“La Corte, por esto, se ha opuesto y se opone a criterios restrictivos, de hecho,

proscritos en el artículo 11 del Código General del Proceso. Según su tenor, para la «efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial», el juez debe abstenerse de «exigir y cumplir formalidades innecesarias». Por ejemplo, en nada interesa que el actor haya errado al aducir la responsabilidad contractual debiendo seguir la extracontractual o viceversa. Lo mismo ocurre en temas de prescripción ordinaria o extraordinaria. Inclusive, en el ámbito de la simulación absoluta o relativa. /En esos casos, entre otros, compete al juez superar los equívocos en la formulación de las pretensiones y buscar lo realmente querido por las partes. En cualquier evento, escrutándolo desde lo fáctico, al margen de nomenclaturas o de fallas estrictamente nominativas. En la hora de ahora, la tarea del juez constitucional no es la de atarse a formulismos, muchas veces vacuos, ni prescindir de auscultar cuanto realmente se halla ventilado y probado”

El régimen de responsabilidad de la pretensión del pasajero lesionado en ejecución del contrato de transporte y de las víctimas indirectas.

Los perjuicios que reclama el pasajero o sus familiares frente al transportador en razón de un accidente de tránsito en ejecución del contrato son de índole “contractual”, en el sentido de que esa obligación surge como consecuencia de haber contratado con el pasajero. Sin embargo, podría decirse también que son de índole “extracontractual”, en el sentido de que la obligación de indemnizar tales perjuicios, a diferencia de otras obligaciones contractuales *típicas* -como la obligación de pagar el precio del tiquete, de seguir determinada ruta o de llevar el pasajero a su destino-, no tiene una regulación en el acuerdo específico de voluntades entre el pasajero y el transportador, sino en la ley civil y comercial – arts. 982 núm 2 y 1003 del Código de Comercio-.

En efecto, la obligación de indemnizar los daños que sufra el pasajero durante el transporte surge para el transportador en razón del vínculo contractual, pero como consecuencia legal necesaria a la celebración del contrato y no como uno de los acuerdos disponibles o típicos entre las partes. En la medida

que no hay acuerdo disponible sino obligación legal, el transportador no podría exonerarse de esa responsabilidad, ni aún existiendo pacto expreso en contrario. Se trata pues de una obligación legal relativa al contrato de transporte, en razón del carácter público y el interés esencial del servicio: el transportador debe llevar al pasajero sano y salvo a su destino o responder por los daños. Una obligación de resultado que sólo se libera por una causa extraña.

No hay duda de que cuando el pasajero demandante fundamente sus pretensiones indemnizatorias en el incumplimiento de las cláusulas típicas del contrato de transporte, el régimen será contractual. Asimismo, el régimen es en principio contractual cuando las prestaciones que se reclaman tienen su origen obligacional en la ley, pero condicionadas a la celebración de un contrato determinado. Es el caso del pasajero que reclama la indemnización de los perjuicios sufridos en la ejecución del contrato de transporte por accidente. Esta obligación no tiene regulación contractual sino legal, en las normas de responsabilidad por los daños ocasionados en ejercicio de actividades peligrosas y las obligaciones legales específicas del transportador. Esta regulación, en algunos puntos, desborda el marco reducido de la responsabilidad contractual. No obstante, en la medida que el contrato es fundamental al litigio en tanto la obligación legal del transportador surge del vínculo contractual, el régimen es parcialmente contractual para la pretensión del pasajero-víctima directa- demandante.

Según pronunciamiento reciente de la Corte Suprema de Justicia -SC780-2020-, estas características de la pretensión del pasajero lesionado en ejecución del contrato de transporte, supone una interrelación de aspectos contractuales y extracontractuales para la definición del régimen jurídico aplicable, según el problema a resolver. Así, aunque se entiende que el contrato es la regla de adjudicación en razón de la cual responde el transportador, no obstante, existen aspectos como la responsabilidad solidaria de los guardianes de la actividad peligrosa que no hicieron parte del

contrato, la irrelevancia de la culpa o el régimen de la prescripción, que sigue lineamientos propios del régimen extracontractual del daño por actividades peligrosas.

“La responsabilidad que reclamaron los actores por los daños que sufrieron con ocasión del accidente de tránsito atribuible a las demandadas es un instituto autónomo y diferenciado, que no puede clasificarse como subsistema de la responsabilidad contractual ni de la extracontractual, pero que toma y resignifica elementos de ambas instituciones, los cuales deben ser identificados por el juez y probados por las partes para la prosperidad de sus pretensiones o excepciones”.

Cabe anotar que no hay ningún impedimento para que las pretensiones de la víctima directa e indirecta se acumulen en un solo proceso, en la medida que el contrato de transporte sigue siendo un elemento esencial del litigio y de la responsabilidad del transportador y los demás guardianes de la actividad peligrosa, aunque el daño que se reclama y su reparación estén regulados en la ley.

La prescripción del artículo 993 del Código de Comercio:

El artículo 993 del Código de Comercio señala que: *“Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de transporte prescriben en dos años. / El término de prescripción correrá desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación de conducción. / Este término no puede ser modificado por las partes.”*

Para este caso resulta pertinente interpretar la expresión *“acciones directas o indirectas”* contenidas en la disposición.

Esta expresión puede comprenderse de manera amplia, en el sentido de que todas las pretensiones que se fundamenten o bien en la ejecución de las obligaciones típicas del contrato de transporte y se rijan por éste, o bien en el cumplimiento de las obligaciones legales que surgen del contrato de

transporte y se rijan por la ley, tienen un término de prescripción corto de dos años.

Sin embargo, esta interpretación no es aceptable en la medida que estaría dando una ventaja desproporcionada a las empresas de transporte -parte fuerte del contrato-, frente a los pasajeros que afirman haber sufrido daños y reclaman perjuicios con ocasión de accidentes que el transportador tiene el deber legal evitar.

En la medida que el artículo 993 es una norma especial que excepciona las reglas generales de la prescripción debe interpretarse en un sentido restrictivo: prescriben en dos años aquellas prestaciones contractuales típicas, que se derivan directa o indirectamente del contrato de transporte. En cuanto a las prestaciones contractuales atípicas de fuente legal, como el deber de indemnizar los daños que sufra el pasajero en el accidente, el término de prescripción es el decenal, como es común a las prestaciones derivadas de daños antijurídicos por incumplimiento de la ley.

Así, por ejemplo, si una empresa de transporte incumple gravemente por culpa suya la obligación de transportar al pasajero en un día determinado, el pasajero eventualmente podría demandar a la empresa para el pago de indemnización por el incumplimiento de esa obligación, típica y expresa en el contrato de transporte. Por tratarse de una obligación típica, tanto los perjuicios directos -p.e., la devolución del precio del tiquete- e indirectos – p.e., perjuicios materiales del pasajero por no haber podido viajar- derivados de esa causa, prescribirían en dos años, por aplicación del artículo 993 del Código de Comercio.

Otro es el caso si el vehículo transportador se accidenta y el pasajero resulta lesionado. Bajo este supuesto, el término legal para reclamar judicialmente la indemnización no es el previsto en el artículo 993 del Código de Comercio, puesto que el deber de indemnizar no “proviene” de las obligaciones típicas

del contrato de transporte. Aunque el contexto en el que se produce el daño se relaciona con la ejecución de las obligaciones contractuales del transportador, la fuente de su eventual obligación de indemnizar no es el contrato sino la ley. Se trata pues de una obligación indeterminada que tiene fuente extra-contractual. En concordancia, el término de prescripción de los derechos derivados de esa obligación es el término genérico previsto en el artículo 2536 del Código Civil.

Dado el carácter público del servicio de transporte, resulta razonable que la ley proteja la seguridad jurídica de los transportadores, estableciendo términos cortos de prescripción a favor de éstos, para las prestaciones contractuales típicas y determinadas contenidas en el contrato. En cuanto a las obligaciones atípicas que surgen en razón del contrato, indeterminadas y de origen legal, sería desproporcional para los intereses de los reclamantes mantener una interpretación que reduce significativamente su posibilidad de controvertir judicialmente la causación de perjuicios que, al momento del contrato, le era imposible prever.

En conclusión: el término corto de prescripción del artículo 993 aplica cuando las prestaciones directas o indirectas que se reclaman provienen de las obligaciones contractuales típicas del contrato de transporte. En cualquier otro caso, especialmente cuando el pasajero resulte dañado en un accidente durante la ejecución del contrato de transporte, tanto las pretensiones de indemnización de la víctima directa bajo el régimen de la responsabilidad contractual, como las pretensiones de indemnización de las víctimas indirectas bajo el régimen de responsabilidad extracontractual, prescriben en el término general previsto en el artículo 2536 del Código Civil.

En un caso similar, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia -SC780-2020, - lo expresó así:

“Para saber si se está frente a uno u otro régimen de prescripción hay que preguntarse

si la pretensión que se demanda es susceptible de regulación mediante un convenio privado, o si tal posibilidad está vedada porque su forma de indemnización está preestablecida por las normas imperativas de la responsabilidad extracontractual. En el primer caso se aplicará el régimen de prescripción previsto para el instituto jurídico que rige la específica relación contractual de que se trate. En el segundo evento, se aplicará la prescripción de las acciones ordinarias.

Cuando las pretensiones procesales que se acumulan en un mismo litigio se rigen por la acción sustancial que se encamina a reclamar la indemnización de los daños causados a los pasajeros con ocasión de la ejecución de un contrato de transporte, esa relación jurídica no depende de la autonomía privada de los contratantes ni del régimen supletivo del derecho de los contratos, por lo que la prescripción aplicable es la prevista en el capítulo III del Título XLI del Libro Cuarto del Código Civil, es decir la prescripción decenal de las acciones ordinarias (artículo 2536)”.

La prescripción de los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio y su incidencia en la pretensión directa:

Las disposiciones de los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio establecen el régimen de prescripción a favor de las aseguradoras, respecto de las obligaciones derivadas del contrato de seguro de responsabilidad civil. Estas disposiciones realizan diferenciaciones entre la prescripción ordinaria de dos años y la extraordinaria de cinco años. Asimismo, establece diferencias entre la víctima y el asegurado para el computo de los términos de prescripción.

El asegurado es el titular del interés asegurable. En el seguro de responsabilidad es aquella persona que puede ver afectado su patrimonio ante la ocurrencia de un siniestro por el cual deba responder. El contrato de seguro protege su patrimonio. Por su parte, la víctima es la persona que sufre un daño con ocasión del siniestro y en tal calidad es beneficiaria de la

correspondiente indemnización -art. 1127, ibídem-. Puede ocurrir que sea el asegurado quien sufra el daño, caso en el cual concurren en él las dos calidades: asegurado y víctima. También puede ocurrir que un actuar del asegurado dañe a un tercero, caso en el cual éste sería la víctima y el beneficiario de la indemnización.

Si quien reclama la indemnización tiene la doble calidad de víctima y asegurado -por ejemplo, un daño al vehículo de propiedad del asegurado-, el término de prescripción comienza a correr desde la ocurrencia del siniestro. Esto en razón de que la víctima-asegurado, en su calidad de tal, no sólo tiene un conocimiento exacto del momento de la ocurrencia del daño, sino que también tiene certeza sobre la existencia y las condiciones del contrato de seguro que lo hacen beneficiario de la indemnización.

Este no es el caso si quien reclama la indemnización es un tercero ajeno al contrato de seguro, víctima de un actuar imputable al asegurado -por ejemplo, el daño al pasajero en ejecución del contrato de transporte- y por tanto beneficiario de la indemnización a cargo de la aseguradora por disposición de ley. En este caso, el término de prescripción de las obligaciones derivadas del contrato de seguro es el extraordinario de cinco años. Así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia:

“Corolario de lo anterior, a modo de reiteración, es que si bien el artículo 1131 del Código de Comercio no exceptuó la aplicación del artículo 1081 de la misma obra, que se mantiene como la regla fundante en materia de prescripción extintiva de los derechos y acciones derivados del contrato de seguro o de las normas que lo disciplinan, sí consagró una excepción a ese sistema, la cual es aplicable solamente al seguro de daños –en particular al seguro de responsabilidad civil- y que consiste en que a la acción directa de la víctima contra el asegurador, autorizada expresamente por la Ley 45 de 1990, es aplicable únicamente la prescripción extraordinaria contemplada en la segunda de las disposiciones aquí mencionadas, estereotipada por ser objetiva; que corre en frente de “toda clase de personas”, vale

decir, capaces e incapaces, y cuyo término es de cinco años, que se contarán, según el caso, desde la ocurrencia misma del siniestro, o sea, desde la fecha en que acaeció el hecho externo imputable al asegurado —detonante del aludido débito de responsabilidad—.” (Sentencia Rad. 009-1998-04690-01 del 29 de julio de 2007).

Esta interpretación se justifica por una razón fundamental. La víctima conoce el momento del siniestro desde su ocurrencia, pero si se trata de un sujeto distinto al asegurado, no tiene por qué conocer de la existencia del contrato de seguro o de sus condiciones. No puede olvidarse que la prescripción es una sanción legal ante la negligencia en el ejercicio efectivo de un derecho, a favor de la seguridad jurídica que consolida situaciones por el paso del tiempo. No obstante, si se concluye que los términos prescriptivos comienzan a correr antes de que el titular del derecho tenga la oportunidad de conocer su calidad de tal, o las condiciones bajo las cuales pueda reclamarlo, no se está sancionando una negligencia en el ejercicio de un derecho, sino que simplemente se estaría privilegiando al sujeto obligado a indemnizar. Si la prescripción ordinaria es útil para garantizar la seguridad jurídica de la actividad de las aseguradoras cuando quien reclama es tomador del contrato de seguro, resulta desproporcional si se aplica el mismo razonamiento a quien ni siquiera tiene conocimiento de él. Por tanto, no puede ser éste el sentido que el Tribunal le otorgue a la ley especial.

Caso concreto:

En esta instancia no se discute ni el hecho generador del daño, ni la existencia del contrato de transporte, ni los perjuicios ocasionados a las víctimas demandantes. Los reparos que debe resolver la Sala son:

El término de prescripción del derecho del pasajero lesionado a recibir una indemnización,

su relación con el régimen jurídico de primera instancia y una presunta violación del debido proceso por falta de congruencia en la decisión.

Se alega que existió una vulneración del derecho al debido proceso de los demandados en la sentencia de primera instancia, consistente en que el juez varió el régimen de responsabilidad civil que fundamentó las peticiones de la demanda. En ésta se invocó un régimen de responsabilidad contractual propia del contrato de transporte y el juez condenó con base en normas propias de un régimen extrancontractual. Esta decisión habría afectado el cómputo de los términos de prescripción. En lugar de aplicarse la norma especial del artículo 993 del Código de Comercio, se aplicó el artículo 2536 del Código Civil.

Acorde con lo ya considerado en el acápite anterior, el deber de congruencia por parte del juez -art. 281 del CGP- lo obliga a resolver en concordancia con los hechos y las peticiones de la demanda, para garantizar el derecho de contradicción de la parte pasiva de la pretensión. En principio, el juez civil puede resolver el litigio con base en consideraciones jurídicas distintas a las que plantean las partes, siempre que se atenga a los hechos y a las peticiones que se alegan.

En este orden de ideas, no existe un defecto formal en la sentencia de primera instancia derivada del hecho de que se haya decidido aplicar el régimen de prescripción propio de la responsabilidad extracontractual, por el hecho de que el demandante haya afirmado genéricamente en la demanda que el régimen aplicable a su pretensión era el propio de la responsabilidad contractual. Lo anterior, en la medida que esto no impidió de ninguna manera la contradicción efectiva de las partes, ni existe una regla procesal que imponga tales límites -como por ejemplo si ocurre, por lo menos en principio, con la pretensión punitiva típica en materia penal-.

Por lo anterior, es razonable concluir que el juez actúa dentro del marco de

su competencia, cuando aplica al caso sometido a su juicio el derecho que corresponde, de buena fe y según su leal saber y entender. Esto fue precisamente lo que hizo el juez de primera instancia. Por tanto, no se modificará su decisión con base en estos argumentos.

Ahora bien ¿se aplicó correctamente el régimen de prescripción a este caso? Se trata de definir para este caso si debe aplicarse el régimen de prescripción corto del artículo 993 del Código de Comercio, o el término de prescripción largo del artículo 2536 del Código Civil.

Téngase en cuenta que la obligación cuya declaración y condena se solicitan en la demanda, tiene su origen causal en un accidente de tránsito donde resultó lesionado Juan Pablo Córdoba Echavarría, mientras se transportaba como pasajero del vehículo de transporte público de placas TSK 214, en el que se transportaba en calidad de pasajero, mediando un contrato oneroso de transporte.

Acorde con lo considerado en el acápite anterior, como esa obligación es de fuente legal, atípica en relación con el contrato de transporte, el régimen contractual aplicable es el propio de la responsabilidad civil extracontractual, artículo 2536 del Código Civil. En efecto, la Sala considera que la interpretación adecuada del alcance del artículo 993 del Código de Comercio, con base en las normas y precedentes ya citados, supone diferenciar las obligaciones típicas del contrato de transporte -que por tanto están expresamente pactadas y reguladas en él-, de las obligaciones eventuales que se derivan del deber legal del transportador de llevar sano y salvo al pasajero. Sólo para las primeras es aplicable el término de prescripción corto.

Esta distinción no es caprichosa: si para el legislador es razonable garantizar la seguridad jurídica estableciendo términos cortos de prescripción a favor de los transportadores de pasajeros, la proporcionalidad de esa razonabilidad depende de que las obligaciones sometidas a esos términos cortos sean claras

y previsibles desde el momento mismo de la celebración del contrato. Que se expresen y se regulen en él. Por el contrario, si se trata de obligaciones que tienen su origen en daños inciertos sobre la integridad de los pasajeros, al ser éstos imprevisibles al momento de contratar, lo razonable es mantener términos largos de prescripción que garanticen el derecho a pretender una indemnización en la mayor medida de lo posible.

En ese orden de ideas, se considera que el juez acertó al definir el marco jurídico de prescripción para este caso, con base en el artículo 2536 del Código Civil.

Ahora bien, los apelantes plantean que con ello se desbordó el marco jurídico planteado por el actor en la demanda, con base en el régimen de responsabilidad contractual propia del contrato de transporte. Sin embargo, como ya se dijo, el juez no está obligado a las interpretaciones jurídicas de las partes. Por otro lado, es importante tener en cuenta que, según los precedentes de la Corte Suprema de Justicia, el régimen de responsabilidad aplicable a estos casos toma elementos normativos de diferentes regímenes, dependiendo del tipo de problema que plantee el litigio.

A juicio de la Sala, no puede decirse propiamente que haya una discordancia cuando se eleva una pretensión con base en un régimen de responsabilidad regulado por normas especiales y el juez lo resuelve con base en normas generales. Esto puede ser justificable o no dependiendo del problema que el litigio plantee y de si éste es objeto o no de regulación por tales normas especiales. Así, cuando el juez considera que el artículo 993 del C. Comercio no es aplicable a este caso por las razones ya expuestas, no está cambiando el régimen de responsabilidad, sino interpretando que la norma especial sobre la prescripción corta a favor de los transportadores no se aplica a este tipo de obligaciones, con base en los precedentes.

Por lo expuesto, se considera que este argumento no está llamado a modificar

la decisión de primera instancia.

Los reparos frente a la prescripción de las obligaciones de indemnizar de la aseguradora, por haber transcurrido el término especial de prescripción de los artículos 1081 y 1133 del Código de Comercio.

El accidente donde se produjo el siniestro ocurrió el 27 de enero de 2013. La demanda sólo se interpuso el 19 de diciembre de 2017. Según la aseguradora, en este caso habría operado el término de prescripción ordinaria de dos años, previsto en la ley comercial para “las acciones directas” derivadas del contrato de seguro.

Según lo ya considerado, los términos de prescripción para la víctima beneficiaria del contrato de seguro de responsabilidad por un daño imputable al tomador es el término objetivo de la prescripción extraordinaria de cinco años. Aún en el cómputo que realiza el apelante, donde no se tienen en cuenta posibles factores de suspensión de la prescripción por ser la víctima directa menor de edad al momento del accidente o por los intentos de conciliación extrajudicial, resulta claro que esos cinco años no han transcurrido. Por tanto, no hay lugar a modificar la decisión de primera instancia por este argumento.

Los reparos en relación con el contrato de seguro.

En la sentencia de primera instancia se acogió el llamamiento de garantía que formuló Hernando Antonio Múnera Madrid frente a Axa Colpatria Seguros. En las consideraciones se menciona tanto una póliza de responsabilidad extracontractual -núm. 6158006374-, que según la sentencia la habría aportado el llamante; y la póliza de responsabilidad contractual núm. 6158005941 (cfr. fl. 19 C.2). En la sentencia no resulta claro con base en cual de las dos pólizas se analiza y se concluye sobre la responsabilidad de la aseguradora.

En su apelación, Axa Colpatria señala, por un lado, que la póliza de responsabilidad extracontractual no se aportó como prueba a este proceso; por otro lado, afirma que ni aun existiendo tal póliza sería del caso afectarla para este caso, puesto que lo que acá se discute es la responsabilidad por daños al pasajero, amparados en la póliza de responsabilidad contractual. Aunque reconoce la existencia de este último contrato, alega que Hernando Antonio Múnera no está legitimado para formular el llamamiento, por no ser parte de la relación aseguraticia.

A folios 19 y s.s. del cuaderno del llamamiento en garantía, efectivamente obra póliza de seguros donde AXA Colpatria Seguros asume el riesgo de los daños que Flota Nueva Villa S.A.S. pueda ocasionar a terceros, en ejercicio de su actividad de transporte. La empresa transportadora es tomadora y asegurada en ese contrato. No se encuentra prueba de la póliza de responsabilidad extrancontractual mencionada en la sentencia, tal y como alega la aseguradora. Por tanto, el análisis de este punto se circunscribirá a la póliza de responsabilidad contractual efectivamente aportada y reconocida por la aseguradora.

La apelante tiene razón al señalar que es Flota Nueva Villa S.A.S. y no Hernando Antonio Múnera Madrid quien es parte del contrato de seguro, como puede constarse en la póliza. Éste es subgerente y representante legal de esa sociedad, según consta en el certificado de existencia y representación legal (cfr. fl. 178 C.1) y tanto él como persona natural como la empresa transportadora están representados por el mismo abogado, en razón de un único poder (cfr. fl. 266 C.1).

Esa doble calidad en la que ha actuado Múnera Madrid en este proceso parece haber llevado al juzgado de primera instancia a confusión, al momento de dar por contestada la demanda, admitir el llamamiento en garantía, resolverlo en la sentencia y conceder la apelación.

No obstante lo anterior, dado que esta situación no afecta el derecho que surge de la denominada “acción directa” de los demandantes frente a la aseguradora, que ésta reconoce la existencia de la relación aseguraticia con Flota Nueva Villa S.A.S. y que ello no impidió el ejercicio de la contradicción de la llamada en garantía, simplemente se realizará la modificación del caso a la parte resolutive de la sentencia, en el sentido de indicar que de ser procedente algún reembolso por parte de la aseguradora al asegurado en razón de esta condena, sería la sociedad como persona jurídica su beneficiaria y no la persona natural de su subgerente.

Ahora bien, la aseguradora también alega que en la póliza de responsabilidad contractual no se pactó el cubrimiento de perjuicios por daño a la vida de relación y a pesar de ello el juez de primera instancia profirió condena en su contra por este concepto.

Sobre este punto, según ha reiterado la Corte Suprema de Justicia (SC-780 de 2020), los perjuicios por daño a la vida de relación se comprenden dentro de los perjuicios patrimoniales que la condena impone al asegurado -daño emergente- y por tanto están cubiertos por esa modalidad en la póliza de seguro. Lo anterior, a menos que exista una exclusión expresa en la caratula de la póliza. Como en este caso es exclusión no se incluyó, no hay lugar a modificar la decisión de primera instancia por este argumento.

Un razonamiento similar puede realizarse respecto del reparo de la aseguradora de que su responsabilidad frente a la víctima resulta excluida por el dolo o el incumplimiento de las normas de tránsito del conductor de la empresa asegurada. Esta exclusión no se dispuso expresamente en la caratula de la póliza, ni es imputable a la víctima beneficiaria, por lo que resulta ineficaz. Por tanto, tampoco se modificará la decisión por este concepto.

COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 365.3 del CGP, se condenará en costas a la parte apelante.

Como agencias en derecho, siguiendo los parámetros del Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijará una suma equivalente a dos (4) salarios mínimos a favor de los demandantes y cargo de los demandados.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto en el apartado considerativo previo, la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

FALLA

Primero: Modificar el numeral quinto de la sentencia del 24 de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín, en el sentido de indicar que en caso de haber algún reembolso por parte de la aseguradora al asegurado, éste será a favor de Flota Nueva Villa S.A.S., y no de Hernando Antonio Múnera Madrid, como persona natural.

Segundo: Confirmar el resto de la providencia de primera instancia.

Tercero: Se condena en costas a los demandados. Como agencias en derecho, se fija una suma equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

05001 31 03 008 2017 00744 01
MP Martín Agudelo Ramírez

En firme lo decidido, devuélvase el expediente al despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase;



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ

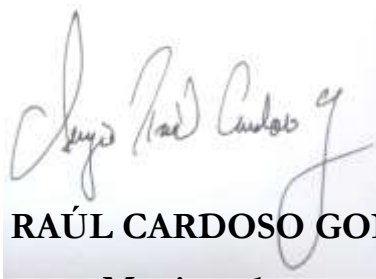
Magistrado



Con salvamento de voto

JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Magistrado



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ

Magistrado